

Documento de posición

Las ciudades como palancas

para la transformación
socioecológica



misereor
TEJIENDO UN MUNDO JUSTO

| | |
|--|----|
| Glosario | 3 |
| Urbanización global: situación inicial y tendencias | 5 |
| Desafíos urbanos | 9 |
| Pobreza urbana y desigualdad social | 10 |
| Crisis climática y medioambiental | 14 |
| Desafíos de gobernanza | 18 |
| Camino a la transformación urbana | 19 |
| Cuatro directrices para la transformación urbana | 20 |
| 1. Orientación sistémica | 20 |
| 2. Enfoque en la pobreza y la participación | 20 |
| 3. Fundamento en los derechos | 21 |
| 4. Conservación de los recursos y justicia climática | 22 |
| Enfoques prácticos para la transformación urbana | 23 |
| Conclusiones y recomendaciones | 32 |
| Bibliografía | 35 |



Glosario

Las **Conferencias Hábitat** de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat I, Hábitat II y Hábitat III) se celebran cada veinte años desde 1976. La primera tuvo lugar en 1976 en Vancouver (Canadá), la segunda en 1996 en Estambul (Turquía) y la tercera en 2016 en Quito (Ecuador). Los documentos finales de estas conferencias reflejan el estado del debate sobre el desarrollo urbano internacional y denotan una significativa influencia de las demandas de la sociedad civil. Entre otros temas, la Agenda de Vancouver establece una política de vivienda orientada a la autogestión del hábitat mediante el apoyo a la producción social de viviendas. El Programa de Hábitat de Estambul insta a los gobiernos a establecer progresivamente el derecho humano a la vivienda. El documento correspondiente de la conferencia de Quito es la Nueva Agenda Urbana (NAU).

No existe una definición oficial estandarizada del concepto de **justicia climática**. Se basa en el reconocimiento de que las regiones y los grupos poblacionales que menos han contribuido históricamente a la crisis climática suelen ser también los más afectados por sus consecuencias. Esta distribución desigual entre los que han contribuido al calentamiento global y los que sufren sus efectos existe tanto entre regiones y países como dentro de las sociedades mismas. Un componente central de la justicia climática es la exigencia de transferir los costos de la contaminación ambiental a quienes la han causado, lo cual se conoce asimismo como el principio de “quien contamina paga” (véase también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas). Las organizaciones de la sociedad civil del Sur global, en particular, abogan por la justicia climática. Hacen hincapié en que la injusta distribución de la carga climática es consecuencia de las desigualdades existentes en las relaciones y estructuras de poder. Poner a disposición fondos de financiación climática para el Sur global es un elemento central de la justicia climática.

Los **países menos adelantados** o PMA (en inglés: *Least Developed Countries* - LDC) son un grupo de países especialmente pobres del Sur global, definidos por las Naciones Unidas con arreglo a criterios socioeconómicos. Estos países están muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2023, el grupo

de PMA incluía 33 países africanos, ocho asiáticos, tres del Pacífico y uno del Caribe.

El **principio de “no dejar a nadie atrás”** (en inglés: *Leave no one behind*) es el principio rector de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Establece que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ir orientada ante todo a mejorar la situación de las personas especialmente desfavorecidas.

Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** o ODS (en inglés: *Sustainable Development Goals* - SDG), también conocidos como Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, son 17 objetivos económicos, sociales y ambientales de aplicación mundial establecidos por las Naciones Unidas y acordados por la comunidad mundial en la Agenda 2030, adoptada en 2015.

Las **Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional** o CDN (en inglés: *Nationally Determined Contributions* - NDC) son estrategias nacionales de implementación asumidas por compromiso propio en los ámbitos de la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus consecuencias y la financiación de medidas de acción climática, aunque no son vinculantes en virtud del Derecho Internacional. Constituyen el núcleo del Acuerdo de París.

La **Nueva Agenda Urbana** o NAU (en inglés: *New Urban Agenda* - NUA) es el documento final de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III, celebrada en 2016 en Quito, Ecuador), el cual proporciona una hoja de ruta global para el desarrollo urbano. En virtud de la visión compartida y los compromisos acordados a favor del desarrollo urbano sostenible que se establecen en el documento, este también se considera un instrumento clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La NAU adopta un enfoque intersectorial e interregional y hace referencia explícita al “derecho a la ciudad”. Sin embargo, no contiene ningún requisito de implementación o seguimiento.

Los **límites planetarios** son nueve umbrales ecológicos de la Tierra, que incluyen las consecuencias de la crisis

climática, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo (por ejemplo, la conversión de bosques en tierras de uso agrícola u económico o la conversión de tierras agrícolas en zonas de asentamiento) o la acidificación de los océanos. Superar estos límites puede conducir a puntos de inflexión irreversibles como el deshielo de los glaciares, la destrucción de las selvas tropicales, la alteración de los sistemas monzónicos o cambios en la corriente del Golfo, poniendo en peligro la estabilidad del ecosistema terrestre y, por lo tanto, la existencia de la humanidad.

El **principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas** del derecho internacional es la base de las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas. Partiendo de este concepto se aspira a distribuir equitativamente la carga de la crisis climática y la mitigación del cambio climático. Todos los Estados tienen la res-

ponsabilidad de limitar la crisis climática, en especial aquellos que más han contribuido a ella. Estos Estados deben liderar la mitigación del cambio climático y ayudar a los más afectados a adaptarse a las consecuencias de la crisis climática y a hacer frente a los daños y pérdidas que ya no puedan evitarse. Tras la publicación de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2022, los cuales hacen hincapié en la urgencia de la acción climática, el papel del Sur global es actualmente objeto de un controvertido debate, sobre todo en lo que respecta a sus oportunidades de desarrollo post-fósil.

Con el **Acuerdo de París** de 2015, los Estados firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se comprometieron a limitar el calentamiento global a un umbral significativamente por debajo de 2 °C y, de ser posible, por debajo de 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales.

En el contexto de la crisis climática, la **vulnerabilidad** describe la **susceptibilidad** de los sistemas humanos (por ejemplo, ciudades y asentamientos) o naturales (por ejemplo, bosques y océanos) a sufrir daños como consecuencia de los impactos climáticos. El grado de vulnerabilidad de los individuos o grupos sociales viene determinado por su capacidad para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, en la que influyen factores socioeconómicos como los ingresos, el género, la educación, el origen étnico y otros.

El término **informalidad** hace referencia al influjo o control limitado o inexistente del Estado sobre ámbitos clave de la actividad social, política y económica (vivienda, empleo, representación de intereses, etc.). Esto incluye la prestación de servicios, como el suministro de agua y electricidad o la expedición de certificados. En contextos informales, la autogestión y el trabajo colectivo son estrategias clave de supervivencia para muchos residentes urbanos. Los sistemas formales e informales suelen estar estrechamente interrelacionados.



Foto: K. Klause / Misereor

Vista de un asentamiento informal en Freetown, Sierra Leona

Urbanización global: situación inicial y tendencias

Nuestro mundo está cada vez más urbanizado: el siglo XXI es considerado el “siglo de las ciudades” (WBGU 2016). Desde 2008, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que en 2050 la población citadina aumente a cerca de dos tercios. La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en África y Asia. La creciente demanda de espacio urbano para vivir y de las infraestructuras asociadas también se concentra en estas regiones. Al menos el 60 por ciento de las infraestructuras que existirán en el mundo en 2050 aún no se han construido. Además, las ciudades se ven especialmente afectadas por las consecuencias del cambio climático. El alcance y la velocidad de la urbanización en todo el mundo han alcanzado una escala sin precedentes.

Un diseño urbano inclusivo, basado en los derechos humanos, responsable climáticamente y respetuoso con el medio ambiente, puede tener un importante “efecto palanca” para la transformación socioecológica. Esto se debe al elevado nivel de urbanización tanto actual como previsto, y al hecho de que los principales desafíos globales son especialmente palpables en las ciudades.

En la actualidad, uno de cada tres habitantes en las ciudades del Sur global, alrededor de mil millones de personas en total, vive en asentamientos informales. Los habitantes urbanos vulnerables no solo carecen de acceso a servicios urbanos básicos como el agua potable y la electricidad, sino que también se ven crecientemente afectados por crisis medioambientales y climáticas. Al mismo tiempo, las sociedades urbanas contribuyen de forma desproporcionada a la degradación del medio ambiente, las emisiones

Foto: A. Schaubert / Misereor



Asentamiento en un rompeolas del puerto de la Gran Manila (Filipinas)

Tendencia global de la urbanización

La población urbana mundial crece en 6,4 millones de habitantes cada mes. América del Norte (83 por ciento), América Latina y el Caribe (81 por ciento), y Europa (75 por ciento) ya se hallan muy urbanizadas. En el período hasta 2050, cerca de la mitad de la urbanización mundial se concentrará en solo ocho países (India, China, Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán, Indonesia, Estados Unidos y Bangladesh). Llegando a valores del 90 por ciento, se espera que la mayor parte del crecimiento urbano tenga lugar en África y Asia, donde el nivel medio de urbanización actual es de 44 por ciento y 51 por ciento, respectivamente (incluyendo en Asia a la muy urbanizada China). La población urbana se duplicará en casi todos los países asiáticos de aquí a 2050.

Este crecimiento estará impulsado principalmente por los grupos de población más pobres. Asia seguirá albergando a la mitad de la población urbana mundial. Con una tasa de crecimiento urbano del 3,4 por ciento, el continente africano subsahariano es el que más rápido se está urbanizando en comparación con el resto del planeta; en 2050, seis de cada diez habitantes vivirán también allí en zonas urbanas. La población urbana continuará creciendo asimismo en América Latina, aunque a un ritmo mucho menor en comparación (una media del 0,8 por ciento anual hasta 2050).

(ONU DAES 2018)

de gases de efecto invernadero y la sobreexplotación de los recursos.

La relevancia de las ciudades también se refleja en la *Agenda 2030*. El *Objetivo de Desarrollo Sostenible* (ODS) 11 insta a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Al mismo tiempo, las ciudades son importantes para alcanzar casi todos los objetivos de desarrollo. La mayoría de los ODS solo pueden lograrse con la participación de actores urbanos locales (OCDE 2022).

Misereor también subraya la relevancia de las ciudades como “palancas” del cambio. Además de la especial atención prestada durante décadas al desarrollo de la vivienda y a la protección contra el desplazamiento forzado, aumenta cada vez más la importancia de la mitigación del cambio climático, la adaptación y el manejo de los impactos de las crisis climáticas y medioambientales. En vista de la considerable dinámica de la urbanización, se presta cada vez más atención a las conexiones e interacciones entre la crisis climática y el desarrollo de los asentamientos y las infraestructuras asociadas.

Este documento de posición expone el potencial de las ciudades y las comunidades urbanas para una “transformación socioecológica”. La cuestión central es cómo puede configurarse el cambio urbano para garantizar que las ciudades ofrezcan a las generaciones presentes y futuras un entorno en el que merezca la pena vivir. El documento se basa en las experiencias de Misereor, sus organizaciones contraparte y sus aliados. Contiene ideas para el compromiso intersectorial de la sociedad civil y el trabajo en proyectos concretos en contextos urbanos. De este modo, contribuye al diálogo con personas responsables de las políticas de desarrollo y cooperación internacional, así como con el público especializado.

MITO 1

La urbanización (solo) tiene lugar en las megaciudades

Las megalópolis con más de 10 millones de habitantes, como Lagos en Nigeria, Yakarta en Indonesia o Ciudad de México, moldean la percepción de la urbanización y el crecimiento (descontrolado) de las ciudades en el Sur global. Sin embargo, en muchos países del hemisferio sur, la proporción de la población urbana total que vive en dichas megaciudades es comparativamente baja. En los *países menos adelantados* (en inglés, Least Developed Countries – LDC), se calcula que en 2020 solo el 10 por ciento de la población total de estos países vivía en ciudades. De hecho, el 50 por ciento de la población urbana de los países menos adelantados vive en ciudades pequeñas y medianas de menos de 300.000 habitantes.

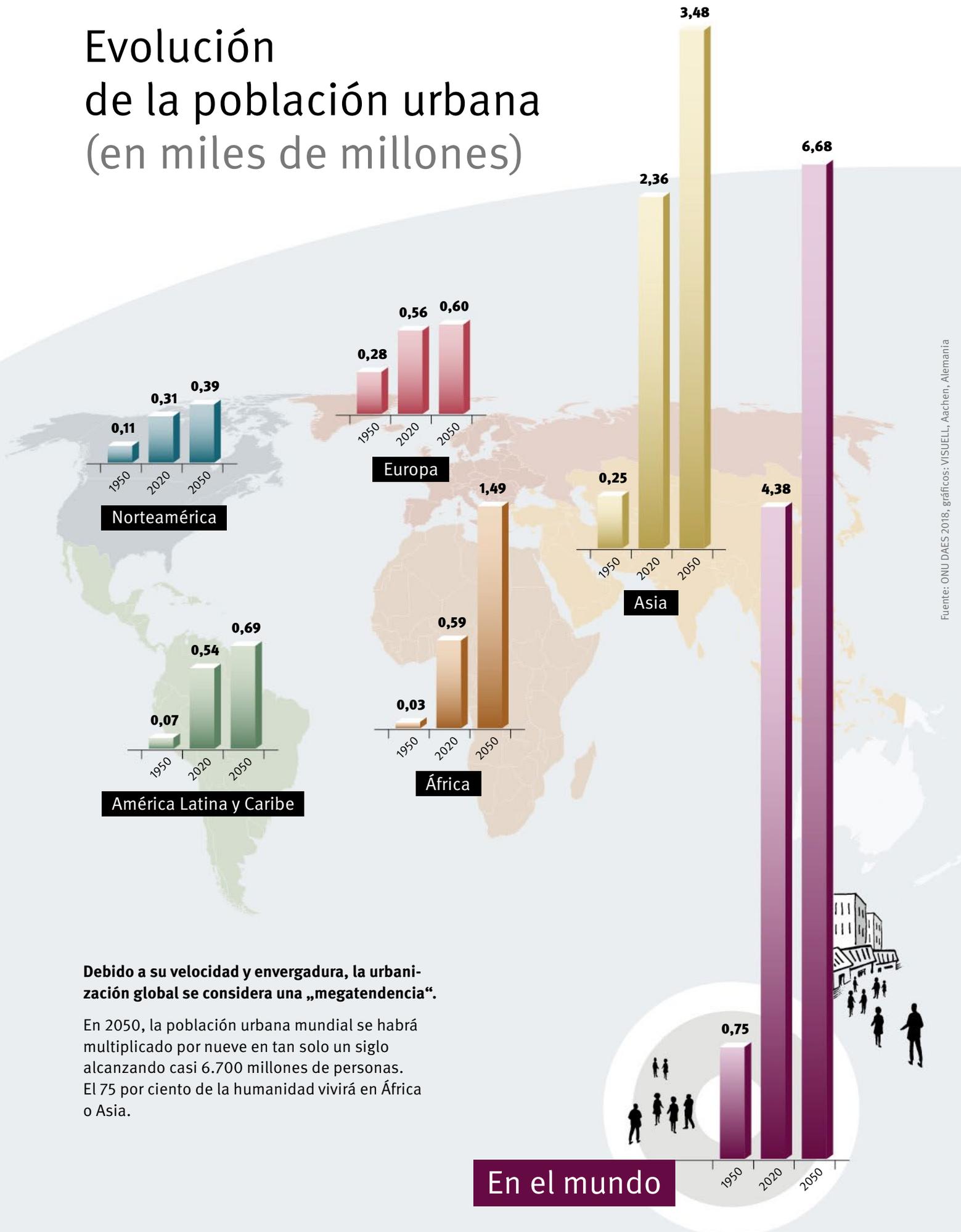
La situación es similar en el África subsahariana, donde el 6 por ciento de la población urbana vive en ciudades de más de 10 millones de habitantes y el 48 por ciento en ciudades de menos de 300.000 habitantes. O en el sudeste asiático, donde el 11 por ciento de la población vive en megaciudades y el 52 por ciento en ciudades de menos de 300.000 habitantes. Estas cifras ilustran la importancia infravalorada de las ciudades pequeñas y medianas como focos de urbanización de facto, por lo que su diseño reviste una gran relevancia.

(ONU DAES 2018; Bolay 2022)

Foto: KM ASAD / Misereor

Barrío de Chad Uddan en la ciudad de Daca (Bangladés): las precarias viviendas apenas ofrecen protección contra el calor, el frío y la humedad.

Evolución de la población urbana (en miles de millones)



Fuente: ONU DAES 2018, gráficos: VISUELL, Aachen, Alemania

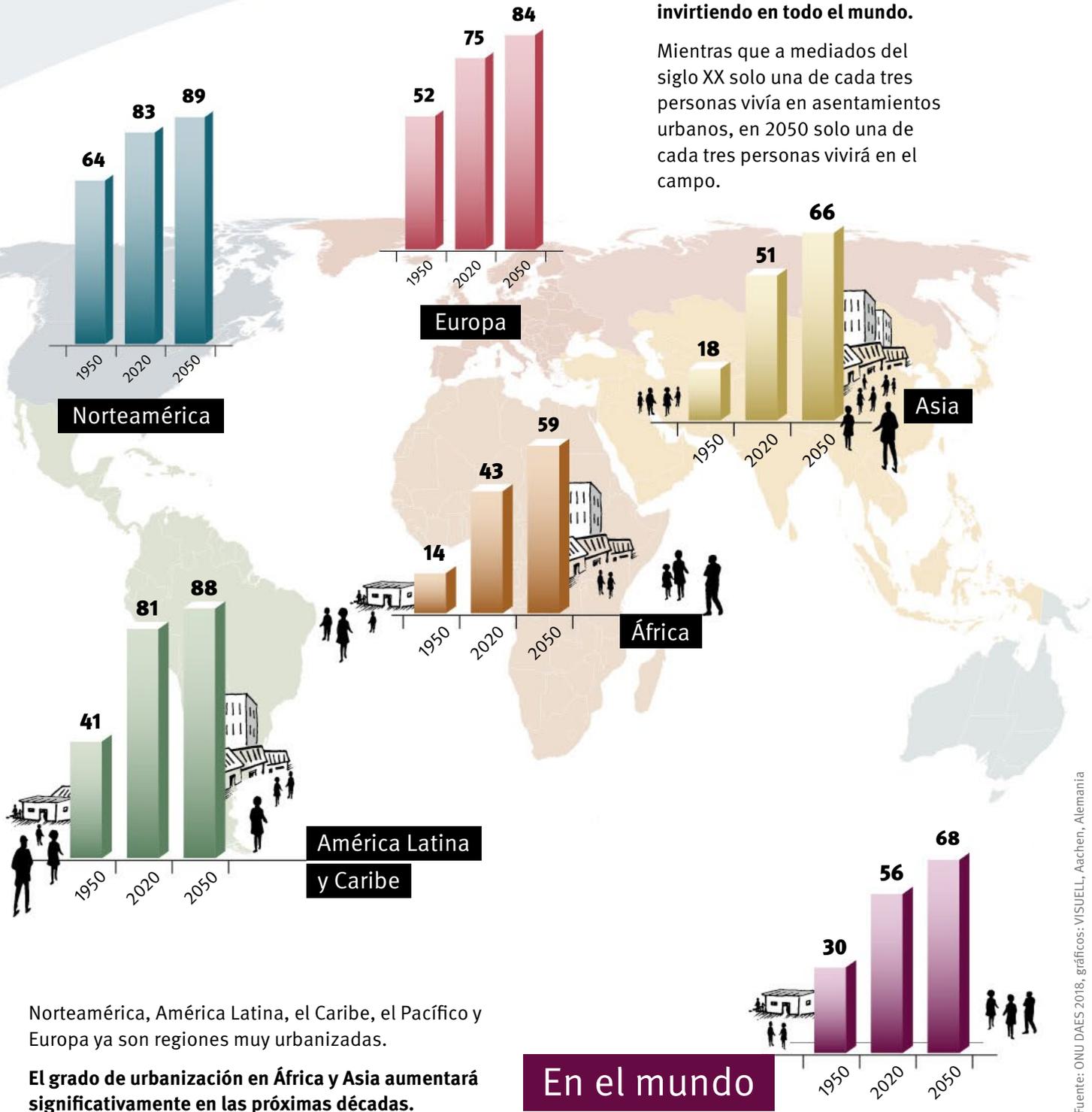
Debido a su velocidad y envergadura, la urbanización global se considera una „megatendencia“.

En 2050, la población urbana mundial se habrá multiplicado por nueve en tan solo un siglo alcanzando casi 6.700 millones de personas. El 75 por ciento de la humanidad vivirá en África o Asia.

Proporción de la población total en zonas urbanas (en %)

La relación de población entre zonas urbanas y rurales se está invirtiendo en todo el mundo.

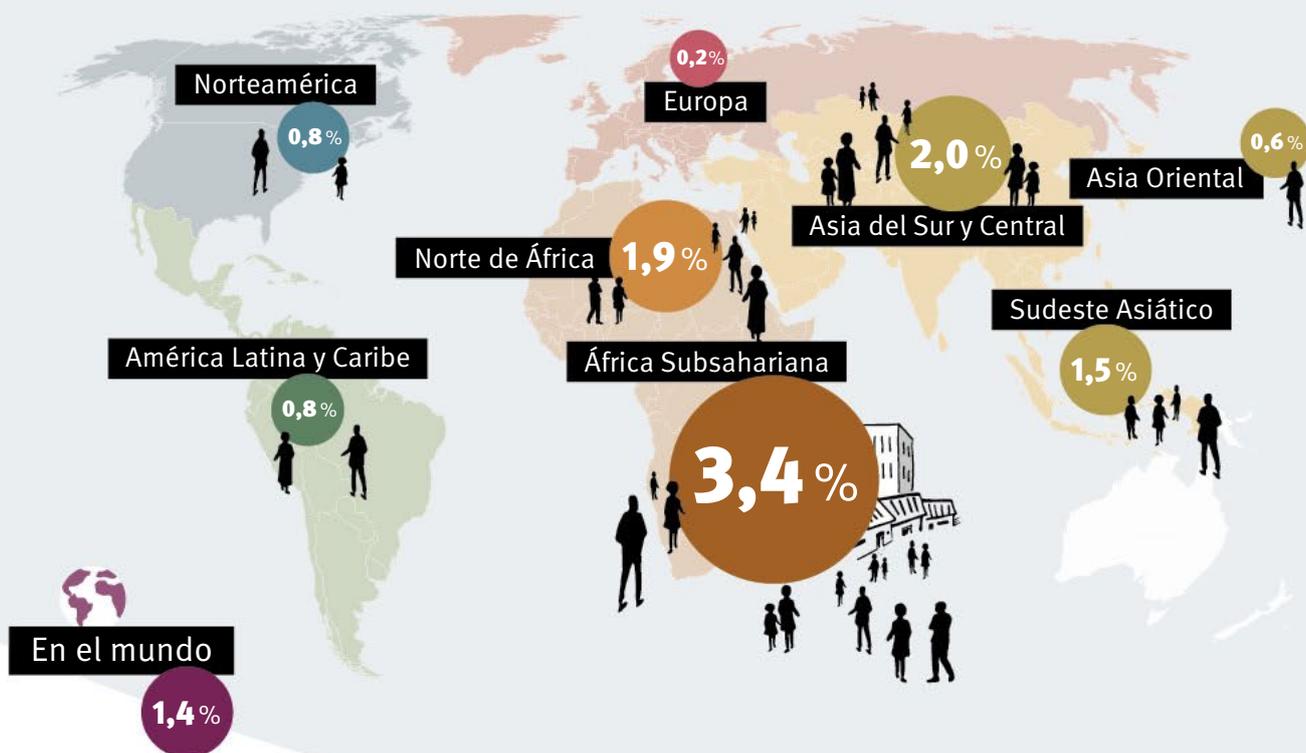
Mientras que a mediados del siglo XX solo una de cada tres personas vivía en asentamientos urbanos, en 2050 solo una de cada tres personas vivirá en el campo.



Norteamérica, América Latina, el Caribe, el Pacífico y Europa ya son regiones muy urbanizadas.

El grado de urbanización en África y Asia aumentará significativamente en las próximas décadas.

Tasa media anual de crecimiento de la población urbana en el Sur global de 2020 a 2050 (en %)



Fuente: ONU DAES 2018, gráficos: VISUELL, Aachen, Alemania

África, especialmente el África Subsahariana, es la región del mundo que más rápido se está urbanizando.

A excepción de Asia Oriental, todas las regiones asiáticas registran también altas tasas de crecimiento. América Latina y Caribe mantienen su tendencia urbanizadora, aunque a un ritmo comparativamente más lento.

En 2050, Sudamérica podría ser la región más urbanizada del mundo.

Foto: K. Harms / Misereor



En el centro de Manila hay personas viviendo junto a un afluente del río Pásig, cerca de sus lugares de trabajo.

Desafíos urbanos

Pobreza urbana y desigualdad social

A pesar de que en las últimas décadas se han logrado avances en la lucha contra la pobreza, esta se ha urbanizado. Esto se debe, por un lado, al número cada vez mayor de personas que vive en ciudades en todo el mundo y, por otro, a un modelo de desarrollo económico que excluye a una gran parte de la población urbana en la mayoría de los países del Sur global. Las grandes ciudades y megaciudades, en particular, se caracterizan por la desigualdad social y las flagrantes diferencias de ingresos. Estadísticamente, esto se refleja en el coeficiente de Gini¹ particularmente alto de las ciudades en comparación con sus respectivos países en su conjunto. Este alcanza 0,74 en Johannesburgo (frente al 0,65 de Sudáfrica), 0,67 en Brasilia (frente al 0,53 de Brasil) y 0,43 en

¹ El coeficiente de Gini es un indicador de la distribución desigual de la renta, donde 0 significa una distribución completamente igual y 1 una distribución completamente desigual.

Al borde del vertedero de Dandora en Nairobi (Kenia)

MITO 2

La población urbana no se ve afectada por la pobreza

Si se toma como base la renta disponible, se considera que vive en la pobreza extrema toda persona que disponga de menos de 2,15 dólares estadounidenses al día (datos de 2022). Según esta definición, la mayoría de las personas afectadas por la pobreza extrema siguen viviendo en zonas rurales.

Sin embargo, la pobreza tiene en realidad múltiples capas y no se expresa únicamente en la falta de ingresos. Por esta razón, en la actualidad prevalece un concepto multidimensional de la pobreza que combina las dimensiones de la educación, la salud, el nivel de vida y el coste de la vida (Harders 2002). Según dicho concepto, se considera extremadamente pobre a toda persona con acceso insuficiente a agua potable, instalaciones sanitarias, energía, movilidad y vivienda. En cualquier caso, la población urbana es más dependiente de los recursos monetarios, ya que, por ejemplo, no puede cultivar alimentos para el autoconsumo (o solo de forma muy limitada) y la vivienda tiene un costo más alto. La desigualdad social es especialmente pronunciada en las ciudades y el coste medio de la vida es más elevado que en las zonas rurales.

Además, la pobreza debe entenderse en términos relativos, es decir, en comparación con el resto de la población y el vecindario inmediato. Incluso aquellas personas que no se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema pueden carecer de dinero para comprar materiales educativos, no tener acceso a una vivienda digna o no participar en la vida social. Asimismo, no se dispone de datos fiables sobre la situación en muchos asentamientos urbanos informales, lo que dificulta la medición de la situación real de pobreza.

(ONU-Hábitat 2022a; FAO et al. 2023)



Muchas viviendas de San Juan de Lurigancho, en Lima (Perú), se sitúan en las laderas de las afueras de la ciudad y están amenazadas por desprendimientos o deslizamientos de tierra.

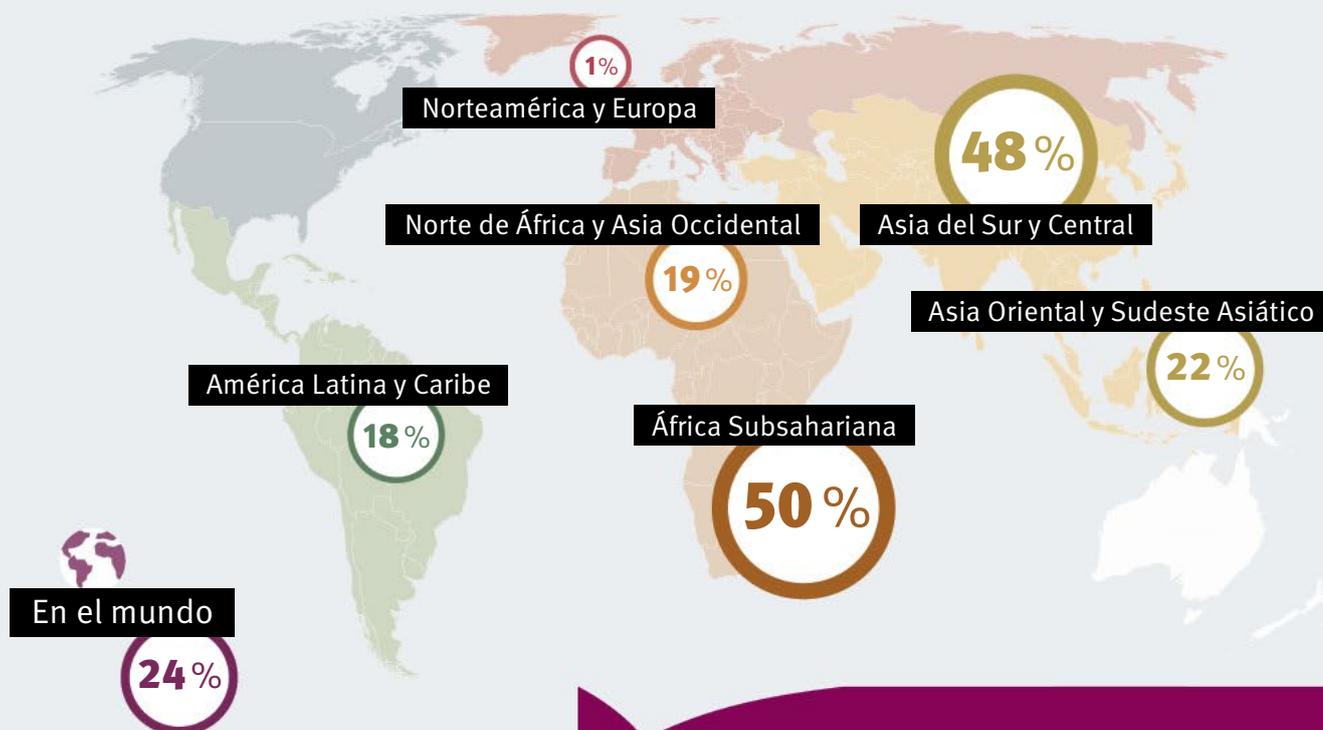
la Gran Manila (frente al 0,41 de Filipinas) (Worldatlas 2024).

La desigualdad social también se refleja en las condiciones espaciales: las personas pudientes viven en barrios urbanos privilegiados, dotados a menudo de fuertes medidas de seguridad y con acceso fiable a servicios públicos o privados. Muchas otras personas, sin embargo, habitan viviendas precarias, por ejemplo, en asentamientos informales, o en condiciones de hacinamiento extremo, sin la debida documentación legal de propiedad, en edificios abandonados (en el centro de las ciudades) o en alojamientos colectivos directamente junto a su lugar de trabajo en fábricas y empresas. En el África subsahariana, este es el caso de bastante más de la mitad de todos los hogares urbanos (Base de datos de ONU-Hábitat 2020). En los países asiáticos, las cifras varían enormemente. En lo que respecta a megaciudades como Bombay, Delhi o Calcuta, se calcula que al menos el 50 por ciento de los habitantes reside

en viviendas informales. En América Latina y el Caribe, el número de residentes en asentamientos informales ha vuelto a aumentar desde hace algunos años, y actualmente representa menos del 20 por ciento de todos los habitantes de las ciudades. Sin embargo, alrededor del 70 por ciento habita en viviendas construidas por iniciativa propia, que en muchos casos no cumplen con las normas de construcción oficiales.

Muchos habitantes pobres de las ciudades tienen trabajos caracterizados por la informalidad, y, por tanto, una escasa cobertura de seguridad social. Esto suele ir acompañado de una mayor vulnerabilidad frente a choques externos (por ejemplo, las consecuencias de la crisis climática, la guerra contra Ucrania o la pandemia de COVID-19) y el abuso de poder (por ejemplo, por parte de las autoridades estatales o en el mercado laboral). Además, sus oportunidades de ascenso social son limitadas. Las mujeres y personas inmigrantes, pero también los niños/as y jóvenes, se ven especialmente expuestos a cualquier tipo de abuso de poder. A menudo, las personas inmigrantes no pueden empadronarse, cosa que les impide acceder a la participación política formal en su lugar de residencia. Son ciudadanos/as, pero no ciudadanos/as. Con ello el estatus informal se perpetúa a través de las generaciones, ya que a menudo ni siquiera se registran los recién nacidos en este entorno.

Proporción de la población urbana que vive en asentamientos informales (en %)



Alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos informales.

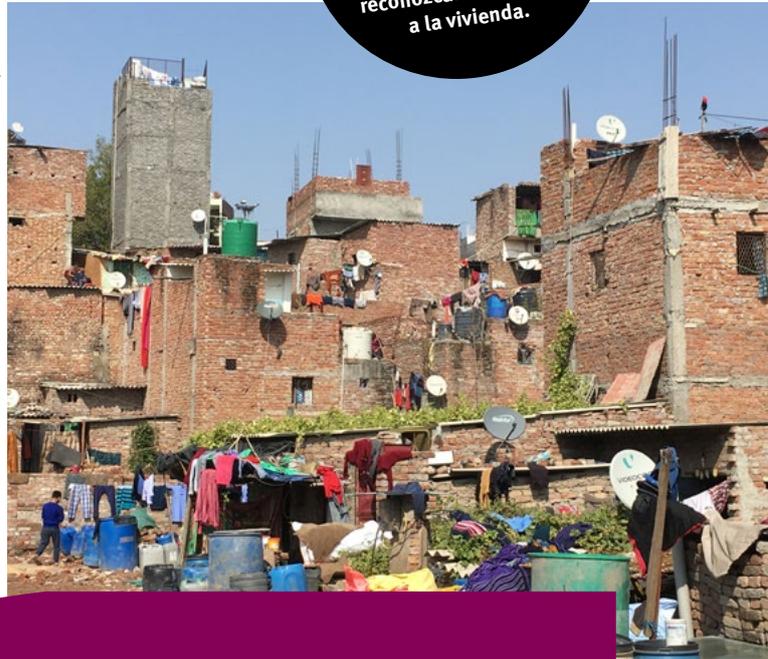
Concretamente, uno de cada tres habitantes urbanos en el Sur global, y uno de cada dos en el África Subsahariana, así como en Asia del Sur y Central, viven en asentamientos informales.

Asentamientos informales

Según la definición del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el término técnico “asentamientos informales” se refiere a áreas urbanas que se caracterizan por al menos uno de los siguientes problemas: acceso insuficiente a agua potable e instalaciones sanitarias, infraestructuras sociales como escuelas y hospitales, energía y movilidad, alta densidad de viviendas, mala calidad de las construcciones (no cumplen las normas oficiales de construcción) y tenencia no garantizada. En todo el mundo se utiliza una amplia variedad de términos específicos de determinadas regiones que a menudo tienen connotaciones peyorativas. Estos incluyen, por ejemplo, “asentamientos marginales”, “barrios pobres” o “tugurios” (en inglés, “slums”). Los términos regionales van desde “asentamientos populares” o “favelas” (América Latina/Brasil) hasta “people’s settlements” (África/Kenia) y vocablos locales para “aldea” o “pueblo” en países asiáticos.

En este asentamiento, existente desde hace más de 30 años, grupos de mujeres luchan para que las autoridades reconozcan su derecho a la vivienda.

Foto: A. Schauber / Misereor



Debido a la inseguridad de las condiciones de propiedad y arrendamiento, los **pobladores/as de asentamientos informales** y los **habitantes de otras áreas residenciales precarias** también están expuestos al riesgo de ser desalojados o reubicados a la fuerza. En muchos casos se recurre a la violencia policial e incluso militar para estos fines. Además de medidas de protección del medio ambiente y de adaptación al cambio climático o proyectos de infraestructura, las autoridades utilizan frecuentemente las precarias condiciones de vivienda e higiene de estas zonas como pretexto para justificar desalojos forzados sin ofrecer alternativa habitacional alguna en las intermediaciones.

Los choques externos tienen un impacto particularmente severo sobre la población urbana socialmente desfavorecida del Sur global. Recientemente también han constituido una amenaza para la seguridad alimentaria y energética urbana. Tras décadas de declive, el hambre está aumentando de nuevo, no solo en las zonas rurales sino también en las ciudades: en todo el mundo, más de una de cada cuatro personas adultas residentes en zonas urbanas se ve afectada por una inseguridad alimentaria moderada o grave, con una mayor proporción de mujeres que de varones (FAO et al. 2023).

Justicia de género en las ciudades

Los datos científicos y la experiencia de organizaciones contraparte de Misereor muestran la existencia de profundas desigualdades específicas de género en ciudades de todo el mundo: las mujeres trabajan más a menudo en el sector informal, por ejemplo, como empleadas domésticas, y realizan de media mucho más del doble de tareas domésticas y de cuidados no remunerados que los varones. Estos roles socialmente asignados, divisiones del trabajo y normas establecidas, también conducen a diferencias específicas de género en temas de movilidad.

Las mujeres y niñas tienen un acceso más restringido a sistemas de movilidad y están más expuestas a actos de violencia en los medios de transporte y espacios públicos. Además, debido a leyes o normas sociales discriminatorias, menos del 20 por ciento de las mujeres de todo el mundo son propietarias de tierras, lo que las hace especialmente vulnerables a los desalojos, desplazamientos y reasentamientos forzados.

Todas estas desigualdades incrementan desproporcionadamente la vulnerabilidad de las mujeres ante las crisis económicas, las pandemias y las consecuencias del cambio climático. Al fin y al cabo, el espacio urbano está diseñado principalmente por hombres y se orienta fundamentalmente hacia sus necesidades. Solo el diez por ciento de los principales urbanistas y arquitectos/as son mujeres, las cuales también se encuentran muy infrarrepresentadas en los procesos de toma de decisiones políticas.

(ONU-Hábitat 2022b)

Crisis climática y medioambiental

A la hora de hacer frente a la crisis climática, las ciudades y las sociedades urbanas deben recibir una atención especial. En primer lugar, porque se ven particularmente afectadas por las consecuencias del cambio climático. En los próximos años, la subida del nivel del mar y el aumento de las lluvias torrenciales incrementarán significativamente la probabilidad y la frecuencia de las inundaciones. Más de 800 millones de personas viven actualmente en ciudades cuya subsistencia se verá amenazada por la elevación del nivel del mar si el calentamiento global alcanza los 3 °C (Strauss et al. 2021). Esta cifra seguirá aumentando como consecuencia de la creciente urbanización. Ciudades de todo el mundo están expuestas a este riesgo, pero el continente asiático se ve especialmente afectado. A ello se añade la amenaza de las inundaciones fluviales².

2 Casi mil millones de personas se vieron afectadas por inundaciones fluviales en ciudades asiáticas en 2015 (Shaw et al. 2022).

Por otro lado, un gran número de habitantes de las ciudades —muchos de los cuales ya tienen un acceso deficiente o nulo al agua potable— se enfrentarán a una creciente escasez de agua estacional o permanente. Ciudades como Lima, la capital peruana, corren el riesgo de quedarse sin agua. Lo mismo ocurre en decenas de ciudades de la India. A medida que aumenta la demanda, disminuye la cantidad de agua potable limpia disponible debido a las sequías, el deshielo de los glaciares o la contaminación del agua dulce. Además, se calcula que el número de habitantes urbanos pobres que viven en condiciones de calor extremo podría aumentar un 700

Millones de personas en Asia se ven directamente afectadas por la subida del nivel del mar: Tacloban (Filipinas)



Foto: H. Schwirzbach / Misereor

Las 8 megaciudades más amenazadas por la subida del nivel del mar



- Shanghái** (China)
- Daca** (Bangladés)
- Calcuta** (India)
- Tianjin** (China)
- Hong Kong** (China)
- Bombay** (India)
- Yakarta** (Indonesia)
- Howrah** (India)

| | 3°C | 1,5°C |
|----------------------------|---|---|
| | Habitantes en riesgo (en millones) | Habitantes en riesgo (en millones) |
| Shanghái (China) | 31,0 | 27,0 |
| Daca (Bangladés) | 23,0 | 14,0 |
| Calcuta (India) | 15,0 | 9,3 |
| Tianjin (China) | 14,0 | 9,1 |
| Hong Kong (China) | 14,0 | 11,0 |
| Bombay (India) | 13,0 | 11,0 |
| Yakarta (Indonesia) | 11,0 | 8,0 |
| Howrah (India) | 10,0 | 6,9 |

Número de personas (en millones) que viven actualmente en tierras situadas por debajo de la línea de pleamar con un calentamiento global de 3 °C o 1,5 °C.

Las cifras de población son valores medios.

Fuente: Climate Central 2021; Strauss et al. 2021; gráficos: VISUELL, Aachen, Alemania

por ciento en todo el mundo (UCCRN 2018). Junto a la escasez de agua, otros factores como la acidificación de los océanos o la interrupción de cadenas de suministro a causa de fenómenos meteorológicos extremos, suponen también una importante amenaza para la seguridad alimentaria urbana.

Otro aspecto que debe señalarse es la dramática contaminación del aire en las ciudades, debida sobre

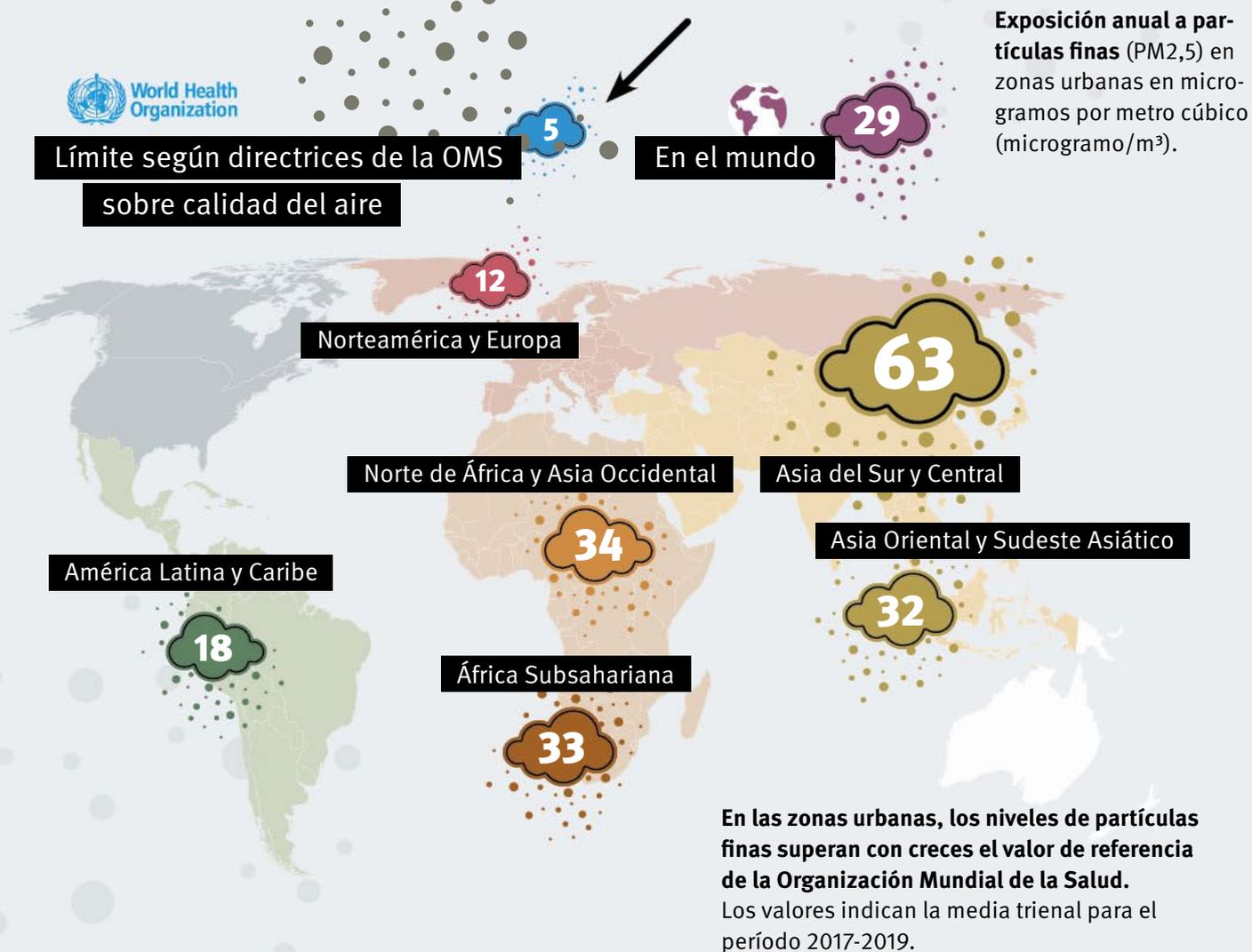
todo a las emisiones del tráfico y las industrias, en combinación con la quema de residuos de cultivos y bosques y las actividades de construcción. El aire tóxico acorta la esperanza de vida de los habitantes de

las ciudades a nivel mundial³. Si bien este problema afecta a todos, las personas empobrecidas de las ciudades tienen especiales dificultades para defenderse de la contaminación atmosférica, ya que, por ejemplo, sus lugares de trabajo suelen estar al aire libre, donde no tienen medios para protegerse como filtros de aire.

Las personas que habitan en **asentamientos informales** se ven especialmente afectadas por los riesgos relacionados con el cambio climático. Como suelen

³ Un estudio publicado en 2022 demuestra que la contaminación del aire en Delhi (India) reduce la esperanza de vida de sus habitantes en una media de casi diez años (Greenstone et al. 2022).

Exposición anual a partículas finas en zonas urbanas por regiones del mundo



vivir en viviendas inestables y zonas residenciales en laderas no estabilizadas ni pavimentadas, riberas de ríos o directamente en la costa, son muy vulnerables a los deslizamientos de tierra, las inundaciones y la subida del nivel del mar. Las infraestructuras sociales y los servicios básicos, que podrían minimizar los riesgos relacionados con el cambio climático, suelen escasear. El carácter informal de los terrenos y las viviendas hace además que los gobiernos nacionales y municipios estén menos dispuestos a invertir, por ejemplo, en infraestructuras climáticamente resilientes.

Por otra parte, las ciudades también contribuyen a la crisis climática, y su elevada demanda de materias primas, energía, bienes de consumo y terrenos supone una enorme carga para los recursos naturales. La mayor parte de las emisiones son generadas por el uso de energía (incluyendo construcción y vivienda) y la movilidad (transporte). Aquí se incluyen tanto el uso de energía en las ciudades como las emisiones causadas por procesos de extracción y de producción de energía fuera de los límites de las ciudades. Estas emisiones pueden ser significativamente superiores a las emisiones in situ (Pichler et al. 2017). A esto se añade el hecho de que el área ocupada por las ciudades podría triplicarse de aquí al año 2050. Esto se debe a que la superficie terrestre urbanizada está aumentando actualmente de forma desproporcionada en comparación con el crecimiento de la población urbana, lo que lleva consigo un enorme desarrollo de infraestructuras que genera fuertes emisiones. En consecuencia, la proporción de emisiones globales producidas por las ciudades seguirá aumentando de forma dramática. Esta evolución contrasta con el *Acuerdo de París*, el cual establece que, en conformidad con el principio

Foto: C. Weichelt / Misereor



En los asentamientos informales de Monte Sinaí, en Guayaquil (Ecuador), los residentes apenas tienen acceso a servicios públicos de abastecimiento o infraestructuras básicas.

de *responsabilidades comunes pero diferenciadas* el Sur global también debería reducir sus emisiones hasta 2050 para que el calentamiento global se mantenga por debajo de 2 °C o, de ser posible, se limite a 1,5 °C.

Aunque muchas ciudades están elaborando planes de acción climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, diversos problemas dificultan su implementación. La financiación suele ser inadecuada. Además, no suelen preverse medidas suficientes para implicar a las sociedades urbanas en la elaboración de estos planes. La participación de los pobladores/as de asentamientos informales, especialmente afectados por las consecuencias de la crisis climática, se ve a menudo impedida por la inseguridad de su situación jurídica (Dodman et al. 2022).

Desafíos de gobernanza

Está claro que las ciudades del Sur global se enfrentan a grandes desafíos. La superación de la pobreza y la desigualdad debe avanzar al mismo ritmo que la adaptación a las consecuencias de la crisis climática y la descarbonización de los sistemas urbanos. Por lo tanto, es de gran importancia centrarse en un enfoque social y ecológicamente justo del desarrollo urbano actual y futuro.

Sin embargo, ciudades y municipios carecen de derechos consagrados en la ley que les permitan tener voz en las decisiones tomadas a nivel nacional. A menudo, las responsabilidades no están definidas con claridad y las posibilidades de participación efectiva de la sociedad civil suelen ser limitadas o inexistentes. También faltan recursos financieros a disposición de las administraciones municipales y organizaciones de la sociedad civil. Los problemas y retos que trascienden las fronteras urbano-rurales y administrativas (disponibilidad de infraestructuras, generación de energía, desarrollo de la movilidad, construcción de viviendas, gestión de agua y recursos,

MITO 3

La urbanización puede contenerse aumentando las inversiones en las regiones rurales

Muchos gobiernos del Sur global han intentado hacer frente a la urbanización frenando la migración del campo a la ciudad, por ejemplo, a través de amplias medidas de descentralización e inversión para las zonas rurales o políticas represivas como el control de residencia o el reasentamiento forzado de migrantes a sus lugares de origen. A partir de la década de 1970, en el ámbito de la cooperación al desarrollo también ha prevalecido un enfoque en las zonas rurales, en parte basado en el supuesto de que las condiciones de vida en las zonas rurales son peores que en la ciudad (véase el mito 2).

Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha podido frenar la urbanización: las diferencias entre las oportunidades de vida en las zonas urbanas y zonas rurales son demasiado grandes, y el margen de acción en términos financieros es demasiado limitado como para cambiar las estructuras espaciales establecidas. A ello se añade la individualización de los proyectos de vida. Por último, se tiende a sobrevalorar la importancia de la migración del campo a la ciudad para la urbanización, independientemente de la creciente relevancia de la migración relacionada con el clima. En muchos países del Sur global, el crecimiento natural y la incorporación o reclasificación de zonas anteriormente rurales contribuyen más significativamente al crecimiento urbano que la migración. En especial, en las sociedades jóvenes, las ciudades suelen crecer por sí solas.

(Awumbila 2017, Jedwab et al. 2017, Steinberg 2014, Tacoli et al. 2015)

Área residencial en Bo (Sierra Leona)

Foto: K. Klause / Misereor

etc.) rara vez se abordan conjuntamente. Esto se debe a menudo a la falta de estructuras institucionales o a que estas no desempeñan un rol efectivo. La planificación conjunta de infraestructuras o usos del suelo también puede verse obstaculizada por intereses contrapuestos dentro de la administración local.

Por regla general, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil que operan a nivel urbano tienen poca influencia en los procesos de toma de decisiones a nivel (inter)nacional. Este es el caso, por ejemplo, cuando se trata de elaborar planes nacionales de mitigación del cambio climático o estrategias de adaptación climática, cuya aplicación, sin embargo, recae en gran medida en las ciudades y los municipios. Ciertamente, cada vez se reconoce más el papel de las ciudades y las sociedades urbanas en la aplicación de la política climática (inter)nacional, pero su potencial aún no se está aprovechando plenamente.

Aunque muchas constituciones nacionales contienen ya referencias al “derecho a la vivienda”, su aplicación fracasa a menudo por la falta de voluntad política o los intereses particulares de actores privados y estatales. Además, los gobiernos de muchos países han restringido el espacio de maniobra para la sociedad civil y su participación. Esto también limita las capacidades de los distintos grupos de las sociedades urbanas para luchar por cambios socialmente justos y soluciones climáticamente responsables.

Foto: H. Schwrbach / Misereor



En las afueras de Tacloban (Filipinas) se está construyendo un dique de protección contra las inundaciones.

Camino a la transformación urbana

Como dijo el antiguo Secretario General de la ONU Kofi Annan en 2017, “la ciudad del mañana determinará nuestro futuro”. Para aprovechar plenamente el potencial de las ciudades y sociedades urbanas como “palancas” para la transformación socioecológica, es clave contar con una visión integrada de las crisis sociales y ecológicas urbanas, sus causas y sus interacciones, partiendo así de un enfoque holístico que considere múltiples ámbitos de actuación. También hay que tener en cuenta el tiempo limitado del que se dispone en vista de la velocidad de los procesos de urbanización.

Para Misereor es importante tener en cuenta las diferencias en las condiciones de partida de las distintas regiones y países. En América del Norte, América Latina y Europa, se trataría de contribuir a transformar espacios ya urbanizados en entornos de vida inclusivos, seguros, climáticamente justos y respetuosos con el medio ambiente. En Asia y África, en cambio, hay más posibilidades para diseñar zonas urbanas y ciudades —algunas de ellas desde cero— siguiendo criterios de *justicia climática*, y dejando atrás la dependencia de los combustibles fósiles.

Cuatro directrices para la transformación urbana

Tomando en cuenta lo anterior, Misereor se rige por las siguientes directrices para su actividad política y en la gestión de proyectos:

1. Orientación sistémica

La perspectiva sistémica pretende lograr cambios sociales, políticos y económicos integrales y extender sus efectos de forma rápida y a gran escala. Los puntos de partida para una estrategia de desarrollo urbano social y ecológicamente sostenible suelen encontrarse más allá de compartimentos espaciales y sectoriales aislados. Se sitúan más bien en la interacción de diferentes ámbitos de actuación como la vivienda, el medio ambiente o la movilidad, e integran varios niveles de administración que van más allá de los límites de las ciudades. La redefinición de parámetros políticos y le-

gislativos, así como la acción coordinada de actores del cambio (en inglés, *change agents*) mediante alianzas a nivel local, urbano, nacional y global, son asimismo relevantes para garantizar medidas de transformación sistémica.

Para establecer objetivos y llevar a cabo intervenciones sistémicas, es necesario basarse en datos científicos (incluyendo datos a pequeña escala) que abarquen escenarios tanto actuales como futuros. Esto permite formular problemas y estrategias actuales a partir de pronósticos de cambios futuros.

2. Enfoque en la pobreza y la participación

En vista del crecimiento de la población urbana, el Consejo Asesor Científico sobre Cambio Global del Gobierno alemán (WGBU por sus siglas en alemán) recomendó en 2016 que las medidas de desarrollo urbano se centraran en los grupos de población más empobrecidos y *vulnerables*, más concretamente en los dos quintiles más necesitados (el 40 por ciento más pobre) de la población urbana (WGBU 2016). Estos grupos serán los que más contribuirán al crecimiento urbano en el futuro. En nuestra opinión, también debe garantizarse que los proyectos de desarrollo de ciudades y asentamientos no se lleven a cabo en detrimento de las personas más empobrecidas, sino que se tengan en cuenta sus derechos en la planificación y ejecución, y se asegure su participación autodeterminada en los procesos políticos y las actividades que les afecten a nivel local y supralocal. La implicación activa de las mujeres reviste aquí especial importancia.

Foto: E. Dick / Misereor



Tiendas de campaña improvisadas donde se instalaron residentes del asentamiento informal de Mukuru kwa Njenga, en Nairobi (Kenia), tras su desalojo forzoso en noviembre de 2021.

Las posibilidades de participación son diversas. Incluyen la colaboración de organizaciones locales de base y movimientos sociales con actores estatales y municipales (por ejemplo, en la elaboración de planes de desarrollo urbano y presupuestos), así como contribuciones al diseño de leyes y programas nacionales. Aparte de ello, para favorecer la representatividad de los actores de la sociedad civil, pueden presentarse

candidaturas de representantes de grupos de población excluidos, a cargos en los órganos municipales. También a escala global, la sociedad civil organizada debe tener posibilidades de ejercer una influencia efectiva.

3. Fundamento en los derechos

Garantizar una vida en condiciones de seguridad, paz y dignidad es tarea de los Estados y los municipios. Esta tarea es multidimensional: el derecho humano al agua potable y al saneamiento está reconocido internacionalmente, al igual que el derecho a una vivienda adecuada. Esto significa que la vivienda debe ser asequible y ofrecer protección contra el frío, el calor, la lluvia y el viento, así como contra las consecuencias cada vez mayores de la crisis climática. Además, debe garantizarse la seguridad de la tenencia como protección contra los desalojos, desplazamientos y reasentamientos forzosos y debe proveerse un acceso sin discriminación a las infraestructuras técnicas y sociales. El respeto, la protección y la materialización

Tomarse en serio y resolver los conflictos entre intereses sociales y ecológicos

A menudo surgen conflictos entre los esfuerzos por proteger el derecho humano a la vivienda y los planteamientos medioambientales destinados a revalorizar o preservar ecológicamente zonas naturales como bosques o riberas de ríos en ciudades o entornos urbanos. Si se ven afectadas zonas residenciales informales la protección de los recursos naturales puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos si no se respeta y protege el derecho a la vivienda de la población afectada. Para resolver estas líneas de conflicto y conciliar la justicia ambiental con la social, se requiere una cooperación continua entre los actores implicados, que incluya, por ejemplo, la protección de las personas amenazadas por desalojos.

Durante el desalojo forzoso del asentamiento de Mukuru kwa Njenga, en Nairobi (Kenia), también se destruyó una escuela primaria.



Foto: E. Dick / MIsereor

de los derechos de los trabajadores, en especial de los trabajadores informales, son otros aspectos clave. Todos estos derechos humanos vigentes deben consagrarse en la legislación y los planes estratégicos, e implementarse de forma coherente.

El “derecho a la ciudad”, que es un derecho colectivo establecido en la *Nueva Agenda Urbana*, agrupa

estas obligaciones, reforzando la perspectiva de las ciudades como bienes comunes urbanos, donde los recursos actuales y futuros (tanto materiales como inmateriales) se distribuyan de forma social, espacial y *climáticamente justa*, y donde todos los residentes puedan participar activamente en los procesos de configuración urbana.

4. Conservación de los recursos y justicia climática

Los procesos de urbanización deben diseñarse teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales y los *límites planetarios* para, entre otras cosas, contrarrestar la pérdida de la biodiversidad y las consecuencias de la crisis climática. De tal modo, las nuevas infraestructuras que se construyan deberán orientarse hacia un futuro post-fósil. Las zonas urbanas tienen un gran potencial en este sentido. Por su carácter compacto y su elevada densidad de población, pueden favorecer estilos de vidas ecológicamente sostenibles reduciendo el consumo per cápita de recursos, energía y suelo. Las ciudades eficientes desde el punto de vista de los recursos y neutras desde el punto de vista climático también pueden contribuir a restringir la extracción de materias primas más allá de sus límites urbanos. El consumo de espacio de las ciudades debe gestionarse con miras a proteger los terrenos naturales y la biodiversidad, así como otras actividades (por ejemplo, agrícolas) en los alrededores, lo cual repercutirá en las zonas de asentamiento que se están construyendo actualmente o se construirán en el futuro.

Las ciudades tienen la responsabilidad de contribuir significativamente al cumplimiento del *Acuerdo de París* y, por tanto, a la limitación del calentamiento global por debajo de 2 °C y, si es posible, por debajo de 1,5 °C. Históricamente, las sociedades urbanas del Norte global son las que más han contribuido a la crisis climática y tienen el deber de tomar medidas contra el cambio climático. Sin embargo, también es crucial garantizar el futuro climáticamente neutro de las ciudades en crecimiento del Sur global, cuya estructura y acceso a la energía aún están en fase de desarrollo. Al mismo tiempo, debe prestarse especial atención a la *vulnerabilidad* de los habitantes empobrecidos de las

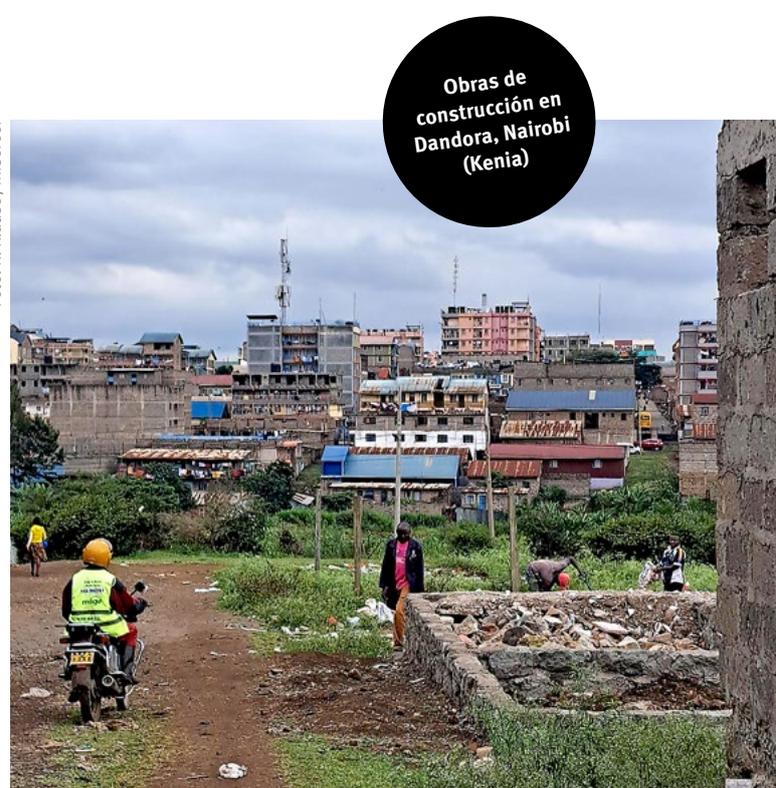


Foto: K. Klause / Misereor

ciudades ante los riesgos climáticos y medioambientales. Las medidas climáticas (tanto de mitigación como de adaptación) deben formar parte de los planes de desarrollo local. Por otro lado, es necesario fortalecer el papel de las ciudades en los planes nacionales de acción climática y desarrollo. Las medidas de política climática deben servir fundamentalmente al bien común, beneficiando a las personas más necesitadas y vulnerables.

Enfoques prácticos para la transformación urbana

Basándose en estas directrices, Misereor y sus organizaciones contraparte utilizan diversos enfoques para promover procesos de urbanización social y ecológicamente justos y transformadores.

Recolección participativa de datos en asentamientos urbanos y ciudades

Las organizaciones contraparte de Misereor ayudan a grupos de base de los **asentamientos informales** y a organizaciones de la sociedad civil a profundizar en el conocimiento de sus barrios y ciudades, realizando tareas de recopilación de datos. Esto proporciona a los residentes información comprensible sobre la situación habitacional, ayudándoles a acceder a servicios básicos. Los datos recogidos constituyen una base importante para negociaciones con administraciones locales y municipales e instituciones estatales y también pueden servir de base para inversiones municipales en infraestructuras. Además, en el marco de auditorías sociales, las organizaciones contraparte supervisan la implementación de medidas de mejora de los asentamientos establecidas en los planes presupuestarios municipales. Por poner un ejemplo, en el marco de una campaña en Sudáfrica durante la pandemia de Covid-19, organizaciones contraparte de Misereor ayudaron a grupos de base a lograr que las autoridades locales prestasen servicios de urgente necesidad

mediante sondeos periódicos sobre infraestructuras (por ejemplo, sobre abastecimiento de agua y servicios sanitarios).

La recopilación participativa de datos y la cartografía son herramientas importantes para identificar riesgos climáticos (tanto actuales como futuros). Los datos obtenidos sirven para elaborar planes locales de acción climática y sistemas de alerta temprana, y también pueden utilizarse en el contexto de la prevención de desastres, tanto a nivel de asentamientos como de ciudades. Por ejemplo, una organización contraparte de Misereor ha cartografiado los riesgos actuales y futuros de toda una megaciudad asiática y su región metropolitana. La resiliencia de una ciudad también depende de que los habitantes de los asentamientos informales estén registrados y reciban suficiente apoyo en caso de desastres.

Foto: H. Schwarzbach / Misereor



La vida cotidiana de las personas que viven en este asentamiento está marcada por el paso de los trenes, así como por el miedo forzado.

EJEMPLO: ASIA

Identificación de posibilidades de cambio sistémico: la Plataforma de Transformación Urbana

El rápido avance de la urbanización y la crisis climática han puesto en evidencia una laguna: ¿Qué visiones positivas existen de ciudades socialmente justas, climáticamente responsables e independientes de los combustibles fósiles? ¿Con qué posibilidades contamos para hacerlas realidad y financiarlas? Aquí es precisamente donde entra en juego la “Plataforma de Transformación Urbana”, creada en 2021. Esta ofrece un espacio de intercambio, asesoramiento y desarrollo de estrategias, el cual está a disposición tanto de Misereor como también de instituciones interesadas que trabajan en diferentes áreas temáticas. Forman parte de ella organizaciones sociales, medioambientales y climáticas. La gestión de la plataforma está a cargo de una entidad externa e independiente de moderación y apoyo al proceso. La Plataforma de Transformación Urbana tiene un enfoque intersectorial, por lo que promueve la creación de redes de actores con diferentes prioridades y áreas de especialización.

Las siguientes cuestiones se sitúan en primer plano: ¿Contribuye una estrategia propuesta a garantizar que la rápida urbanización sea a la vez social y *climáticamente justa*? ¿Se aspira a lograr un amplio impacto que vaya más allá de los logros de un único proyecto? ¿El calendario previsto se ajusta a la necesidad urgente de actuar como consecuencia de la crisis climática? ¿Cuáles son las áreas de acción transformadora más urgentes en la ciudad respectiva? La vinculación de temas, estrategias y actores contribuye a la construcción de alianzas intersectoriales en las que las partes implicadas no solo se consultan y asesoran de igual a igual, sino que también llevan a cabo intervenciones conjuntas.

Vista de los tejados de Tacloban (Filipinas)

Habitantes de un asentamiento informal en Gobabis (Namibia) participan en la planificación del asentamiento y la construcción de sus casas.



Foto: E. Dick / Misereor

Autoorganización para garantizar viviendas asequibles y programas de vivienda estatales y municipales y para luchar contra los desalojos

La magnitud de la urbanización y el déficit de vivienda existente exigen la rápida puesta a disposición de viviendas adecuadas para personas con bajos ingresos siguiendo criterios de responsabilidad climática, incluyendo el acceso a energía, agua, movilidad y servicios sociales. La vivienda social es un elemento central de la transformación urbana, tanto en ciudades pequeñas como en regiones metropolitanas. En los últimos tiempos, por ejemplo, organizaciones contraparte de Misereor han intentado animar a gobiernos locales a construir viviendas modulares como respuesta rápida y económica a la escasez de vivienda existente. Por otro lado, Misereor trabaja con sus organizaciones contraparte en **asentamientos informales** para preservar barrios —que a menudo se han desarrollado durante décadas— y para mejorar gradualmente las viviendas e infraestructuras en función de las necesidades. En ambos casos, entre otras cosas, el objetivo es garantizar un clima interior agradable y asegurar que las viviendas

ofrezcan protección en condiciones extremas de calor, frío o humedad. En vista del ritmo de la urbanización, el reto sigue siendo anticiparse a la demanda para garantizar que haya viviendas adecuadas y dignas para los nuevos residentes. Esto también incluye evitar la existencia de viviendas vacías y combatir la especulación inmobiliaria, aprovechando las viviendas y los espacios habitables disponibles para el bien común. También es importante reconocer las brechas sociales existentes y resolver los conflictos que surjan, por ejemplo, entre propietarios/as e inquilinos/as, residentes de larga data y personas recién llegadas/migrantes, etc.

Política climática urbana

La política climática es una tarea global que requiere un enfoque interdisciplinar. Las ciudades son estructuras complejas y las medidas políticas suelen tener múltiples objetivos. El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), por ejemplo, propone un enfoque integrado de adaptación y mitigación (Shaw et al. 2022). Los diversos campos de acción de la política climática urbana necesitan contar con el apoyo activo de diferentes actores sociales y ecológicos, que idealmente deben actuar juntos. La protección de los derechos de los habitantes de asentamientos informales en relación con proyectos de infraestructura (de adaptación y mitigación del cambio climático), la eliminación progresiva de los combustibles fósiles o el fomento de sistemas de movilidad sostenibles son algunos de los puntos de anclaje de la política climática urbana. En los últimos años, los grupos de base y las organizaciones de la sociedad civil se han involucrado cada vez más en la elaboración de estrategias climáticas a nivel local, así como en los trabajos relativos a los programas nacionales para el clima (*Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional - CDN*). En muchos casos, se han elaborado planes de respuesta al calor y planes de acción climática a nivel de comunidades y ciudades. El gobierno municipal de la ciudad de Calcuta encargó a una organización contraparte de Misereor coordinar la elaboración de un plan de acción climática integral con científicos/as, autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

EJEMPLO: **ÁFRICA**



Agitada vida cotidiana en Bo (Sierra Leona)

Fortalecimiento de la cohesión social urbana y la integración de los migrantes

La inmensa mayoría de migrantes y refugiados/as africanos se desplazan dentro del continente, frecuentemente a países vecinos. Las ciudades son los principales destinos o puntos de tránsito. En comparación con las zonas rurales, ofrecen mejores opciones de trabajo, educación y servicios sanitarios. Además, en muchos casos, dan acceso a comunidades de compatriotas de los países de origen. La mayoría de los migrantes se alojan en **asentamientos informales** o en viviendas de bajo costo en el centro de las ciudades, lo que puede provocar conflictos entre la población local (igualmente *vulnerable*) y los recién llegados. No es raro que estos conflictos se exploten políticamente.

En este contexto, las organizaciones contraparte de Misereor intentan involucrar a los migrantes en organizaciones de base de forma adecuada a fin de visibilizar sus problemas y preocupaciones tanto en relación con su entorno inmediato como con la ciudad en su conjunto. También tratan de mediar en los conflictos que puedan surgir entre diferentes grupos cuando es necesario. Con ello se busca identificar problemas comunes (como la necesidad de mejores viviendas y mejor acceso a servicios sociales y empleo), presentarlos a la opinión pública y exigir soluciones al sector político. Además, las organizaciones contraparte de Misereor apoyan a los refugiados/as urbanos ofreciéndoles asesoría psicosocial y formación laboral para que puedan recuperar su independencia social y económica. En muchos casos, la población local también tiene acceso a estos servicios.

Foto: K. Klaus / Misereor

Alianzas entre actores de la sociedad civil y trabajo articulado de incidencia política

Las redes y alianzas globales que unen a organizaciones y actores de la sociedad civil —tales como la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) o la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C)— presentan un frente unido en foros internacionales de las Naciones Unidas (por ejemplo, las *Conferencias Hábitat*, el Foro Urbano Mundial, el Foro Político de Alto Nivel o las conferencias sobre el clima). Allí defienden los intereses de los residentes urbanos que no suelen ser escuchados, y trabajan para que las directrices y los acuerdos internacionales tengan en cuenta sus necesidades. Al mismo tiempo, promueven procesos globales de aprendizaje e intercambio de experiencias. Las redes regionales como la Red de Acción por el Clima - Sur de Asia (CAN-SA), que forma parte de la red mundial del mismo nombre, defienden los intereses específicos de su región en las negociaciones de las conferencias sobre el clima, abordando las interacciones entre urbanización y crisis climática y haciendo hincapié en la importancia de las ciudades y la sociedad civil en la política climática. Al acompañar a delegaciones gubernamentales, la red ejerce una influencia política directa y actúa como punto de conexión entre procesos políticos locales y globales, además de articular a actores urbanos estatales, municipales y no estatales.

Cabildeo e incidencia política en favor de la financiación de infraestructuras post-fósiles a nivel local, nacional y global

Para lograr un desarrollo urbano justo y sostenible, es necesario condicionar las inversiones en nuevas infraestructuras al cumplimiento de normas vinculantes en materia de derechos humanos y sostenibilidad. Un ejemplo de labor de cabildeo e incidencia política en este ámbito es el planteamiento de un consorcio que vincula a organizaciones asiáticas con actores radicados en Europa. Su labor política se desarrolla así tanto del lado de los países del Norte global, que aportan la financiación, como del lado de los países receptores. El objetivo es poner recursos financieros para infraestructuras al alcance de grupos de base locales e influir en las decisiones estructurales que se toman tanto a nivel global como en los ámbitos nacionales correspondientes. Este consorcio también incluye a

organizaciones de base que trabajan para crear vínculos entre la ciudad y el campo o que se ocupan de temas de infraestructura. Dado que el potencial de las ciudades pequeñas para mitigar el cambio climático es especialmente elevado, una de las prioridades del grupo es promover la financiación de infraestructuras post-fósiles en estas ciudades. En la India, por ejemplo, su potencial de reducción de emisiones equivale al 70 por ciento del total de emisiones en comparación con un enfoque convencional (escenario inalterado o “business as usual”).

Regulación de los mercados de suelo urbano y freno a la especulación inmobiliaria

La habilitación de terrenos sin construir y edificios abandonados en buenas ubicaciones del centro de la ciudad para sectores empobrecidos de la población es un enfoque importante para lograr un desarrollo urbano socialmente justo y “compacto”. También es importante evitar el desalojo y la gentrificación en terrenos ocupados durante décadas y garantizar los derechos de propiedad y acceso de las personas que viven allí, por ejemplo, si órganos del Estado planean un cambio de uso para estos terrenos o son propietarios de ellos. Los proyectos de infraestructura como la ampliación de líneas ferroviarias y carreteras o la construcción de centros comerciales y viviendas de alto nivel son a menudo el punto de partida para demoler asentamientos. En estas situaciones, las organizaciones contraparte de Misereor asesoran a las comunidades en riesgo de desalojo o las representan ante los tribunales. Además, inician y apoyan procesos de negociación con autoridades municipales, ministerios, empresas inmobiliarias privadas y otros entes particulares. En muchos casos, también contribuyen a generar conocimiento y documentación sobre casos de desalojo, utilizando tanto los medios de comunicación tradicionales como los “nuevos” y organizando acciones y campañas para influir en la opinión pública.

EJEMPLO: AMÉRICA LATINA



Sé el CAMBIO que quieres VER EN EL MUNDO

Construcción y diseño comunitario de vivienda y hábitat

El concepto “producción social del hábitat”, es decir, la construcción de viviendas mediante procesos autogestionarios colectivos, surgió en el contexto de la primera *Conferencia Hábitat* celebrada en Vancouver en 1976, y está especialmente extendido en América Latina. La idea es que los propios habitantes diseñen y planifiquen colectivamente sus viviendas y entornos. En muchos casos, esto incluye también las estructuras de suministro, como calles, redes eléctricas o sistemas de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales. También se toman en cuenta aspectos como la creación de zonas verdes y la mejora ecológica de los barrios.

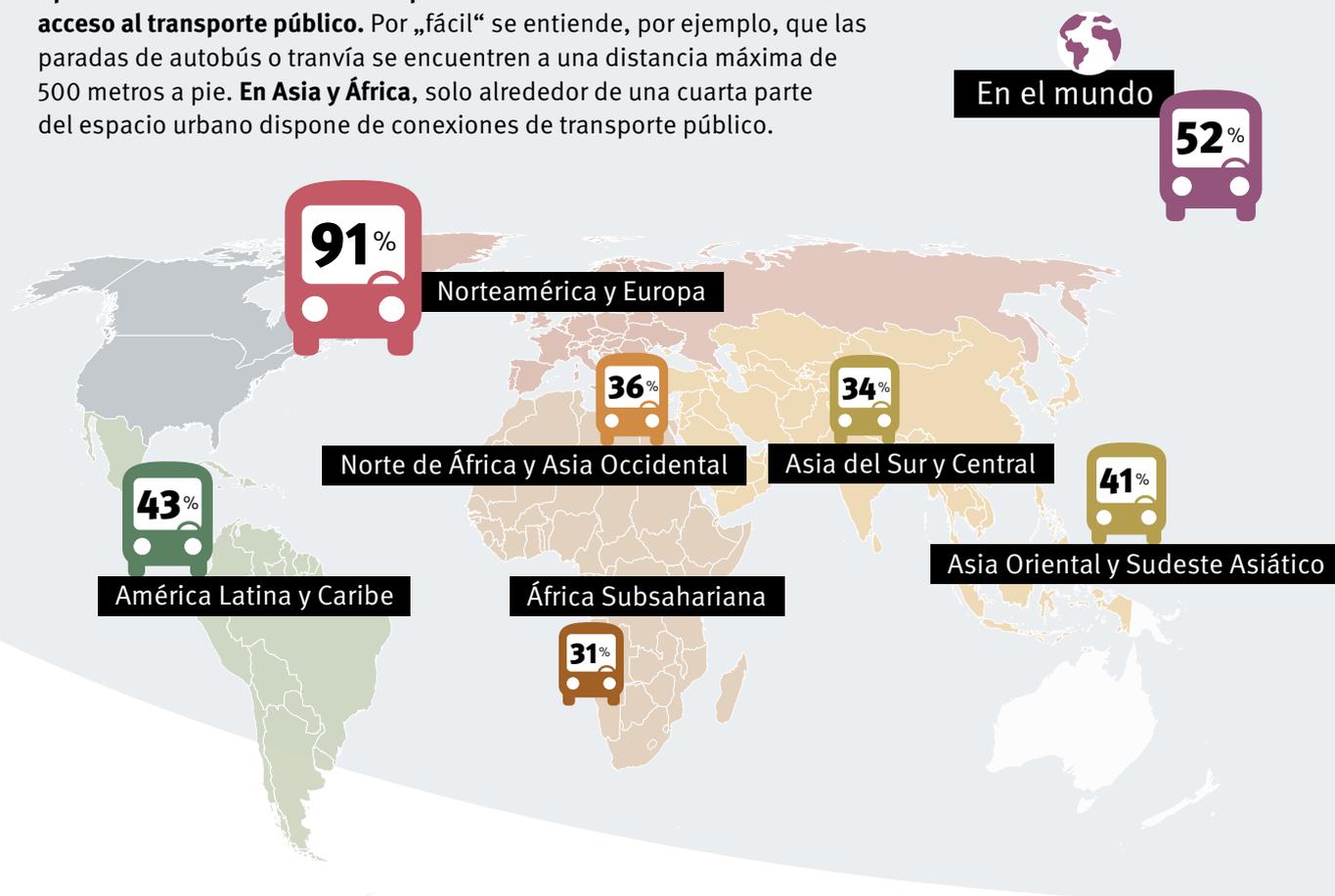
Las organizaciones contraparte de Misereor ofrecen asesoría y apoyo técnico a estos procesos en diversos países. La red global “Coalición Internacional del Hábitat” (HIC por sus siglas en inglés) ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y la difusión de este concepto. A veces, el Estado también apoya la producción social de viviendas. El proceso permite a los residentes directamente afectados participar activamente en los procesos de decisión política y hace posible una transformación socioecológica “desde abajo”. Los principales beneficiarios son personas que, debido a su empleo informal o a sus bajos ingresos, no tienen acceso al mercado formal de la vivienda.

En un mural de Cochabamba (Bolivia) puede leerse “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

Foto: C. Weichelt / Misereor

Proporción de la población urbana con fácil acceso al transporte público (en %)

Aproximadamente la mitad de la población urbana mundial no tiene fácil acceso al transporte público. Por „fácil“ se entiende, por ejemplo, que las paradas de autobús o tranvía se encuentren a una distancia máxima de 500 metros a pie. En Asia y África, solo alrededor de una cuarta parte del espacio urbano dispone de conexiones de transporte público.



Sistemas de movilidad socialmente justos y climáticamente responsables

La transformación de los sistemas de movilidad constituye un elemento central de la transformación socioecológica⁴. El acceso a la movilidad significa acceso al empleo, a los ingresos, a la educación, a los servicios sanitarios y, por último pero no menos importante, a la participación en la vida social. Una ciudad orientada al transporte motorizado privado excluye a los habitantes empobrecidos. Las organizaciones contraparte de Misereor están comprometidas de diversas maneras con una transformación de la movilidad que combine objetivos sociales y ecológicos. Este trabajo se centra en la vinculación del transporte público con la planificación de zonas residenciales, la incidencia a favor

del transporte público y la preservación y creación de espacios para la movilidad activa (a pie y en bicicleta). El desarrollo orientado al transporte —es decir, un enfoque de ordenación territorial que incluya desde el principio las necesidades de un transporte público eficiente y asequible (a menudo como primer paso)— constituye un planteamiento de especial importancia, sobre todo en regiones de rápida urbanización.

⁴ Documento de posición de Misereor de 2023: Movilidad para todos. Aprovechar las oportunidades: ¡Modelar el futuro! (disponible en alemán)

Fortalecimiento de los vínculos entre la ciudad y el campo

Las ciudades no pueden considerarse en forma aislada de las zonas rurales (véase el mito 4). En lo que respecta a la seguridad alimentaria y al suministro de agua potable, energía y alimentos a las ciudades, la importancia de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales resulta especialmente evidente. Las organizaciones contraparte de Misereor apoyan, por ejemplo, la preservación de los ecosistemas y la protección del medio ambiente en las cuencas hidrográficas, así como el establecimiento de vínculos entre productores/as locales y consumidores/as urbanos. También promueven la agricultura urbana, que ayuda a diversificar la alimentación de las familias y, en algunos casos, a mejorar los ingresos. En Brasil, por ejemplo, la creación de consejos de alimentación con representantes de la sociedad civil y el gobierno ha permitido incluir medidas para mejorar la

Vendedora de fruta en un mercado informal del barrio de Anisabad en Patna (India)

MITO 4

La ciudad y el campo constituyen mundos claramente separados entre sí

Durante mucho tiempo, las ciudades y las zonas rurales se consideraron por separado, como si fueran mundos claramente delimitados con dinámicas y retos de desarrollo independientes. Las políticas de desarrollo y las corrientes académicas dominantes han contribuido durante largo tiempo a esta dicotomía y, en muchos casos, aún siguen haciéndolo a día de hoy. De hecho, en muchas organizaciones, las responsabilidades en materia de desarrollo urbano y rural siguen estando claramente separadas. Sin embargo, la realidad es que las zonas urbanas y rurales están estrechamente entrelazadas y existen muchas interdependencias entre ambas. Las ciudades regionales pequeñas y medianas desempeñan una importante función económica y de abastecimiento para la población rural, por ejemplo, mediante la comercialización o transformación de productos primarios. A la inversa, la población urbana depende de los bienes alimentarios y medioambientales de las zonas rurales. Las áreas de carácter puramente rural son cada vez más escasas, y la relación entre regiones rurales y urbanas es a menudo conflictiva. Esto puede observarse, por ejemplo, en las áreas periurbanas de metrópolis en expansión, donde la creciente demanda de zonas residenciales y de abastecimiento provoca el desplazamiento de terrenos agrícolas o espacios libres no urbanizados.

En este contexto, en la política y el ordenamiento territorial se recurre cada vez más a conceptos flexibles como el continuo urbano-rural. Tales conceptos permiten una visión integrada de las zonas urbanas y rurales y una orientación hacia flujos (financieros, medioambientales, humanos, de infraestructuras y de datos) que a menudo atraviesan las fronteras administrativas.

(Dick 2013)





Grupo de jóvenes en San Salvador. Uno de cada dos salvadoreños/as tiene menos de 25 años.

Foto: H. Schwarzbach / Misereor

Las nuevas generaciones como impulsoras de la transformación urbana hoy y en el futuro

Según los pronósticos actuales, en 2030, el 60 por ciento de los habitantes de las ciudades serán niños/as y jóvenes (menores de 18 años). En consecuencia, el desarrollo urbano será también decisivo para las perspectivas de futuro de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, los adolescentes y adultos jóvenes están llamados a ser agentes del cambio, tanto ahora como en el futuro. Para desempeñar este papel, necesitan espacios en los que puedan expresarse y dar a conocer sus inquietudes y necesidades. Aquí es donde intervienen las organizaciones contraparte de

Misereor, por ejemplo, apoyando la creación inclusiva de espacios públicos seguros y centros culturales, de cuya construcción y gestión se encargan directamente los propios residentes. Además, las organizaciones contraparte crean redes de niños/as y jóvenes que reciben formación como “guardianes” del medio ambiente y desarrollan sus propias iniciativas para mejorar la calidad de vida en el barrio, por ejemplo, impulsando campañas de reforestación o recogida de basura. Para fortalecer la cohesión social dentro del barrio, también se organizan eventos culturales (música, danza o teatro), actividades deportivas o trabajos conjuntos en huertos urbanos comunitarios. Estas actividades favorecen asimismo la autoorganización de los residentes (jóvenes) y la lucha colectiva por sus derechos. El arte, la cultura y la creatividad son herramientas y vías de comunicación para el cambio, en manos y al servicio de los habitantes de la ciudad, en especial de los adolescentes y adultos jóvenes.

alimentación en las políticas gubernamentales locales, regionales y nacionales. En Belo Horizonte, se ha conseguido que productos de alta calidad se vendan en ciertos días en las zonas de bajos ingresos a precios fijos. A cambio, los minoristas reciben licencias para vender en zonas urbanas de ingresos más altos durante los días restantes.

Asimismo, procesos destructivos de extracción de materias primas, como el níquel, se abordan de forma transversal, vinculando a comunidades rurales afectadas con comunidades urbanas perjudicadas por proyectos de infraestructura de movilidad. Este ejemplo se basa en la solidaridad entre comunidades afectadas por procesos de generación de energía (represas, minas de carbón) y comunidades urbanas que utilizan esta energía.

Conclusiones y recomendaciones

Para acercarse al objetivo de una urbanización social y ecológicamente justa, se requieren procesos de negociación que abarquen diversos ámbitos de actuación a nivel local, nacional e internacional. Los agentes estatales a cargo de las políticas de desarrollo y cooperación internacional tienen una responsabilidad especial a este respecto. En el marco de la Agenda 2030, se han comprometido a defender el *principio de “no dejar a nadie atrás”*. Esto implica mejorar las condiciones de vida de la población,

en particular de los sectores más empobrecidos. Los actores de la sociedad civil del Sur y del Norte global tienen un potencial extraordinario para iniciar transformaciones sociales “desde abajo”.

Basándose en los desafíos, las directrices y los enfoques de trabajo expuestos en este documento, Misereor plantea las siguientes recomendaciones a los responsables de la toma de decisiones en materia de política de desarrollo, así como a sus organizaciones contraparte y aliados:

Recomendaciones de Misereor a los responsables de la toma de decisiones en materia de política de desarrollo:

1. Reconocer el **papel clave de las ciudades y los actores urbanos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento del Acuerdo de París**. Este reconocimiento también debe reflejarse en decisiones en materia de competencias, apoyo y financiación que tomen en cuenta el rápido ritmo y la magnitud de la urbanización global.

2. Esto implica considerar que las **ciudades, en su calidad de ‘sistema’**, tienen un impacto que va mucho más allá de sus límites administrativos, así como comprometerse con una **planificación urbana y espacial que promueva el desarrollo de ciudades compactas y minimice el consumo de suelo urbano**. Esto también incluye realizar inversiones adecuadas en transporte público y en medidas para reducir las necesidades de movilidad.

3. Garantizar que **los derechos humanos económicos, sociales y culturales queden firmemente consagrados en la legislación nacional, los estatutos y los planes de desarrollo local**, especialmente el “derecho humano a la vivienda” y el “derecho humano al agua potable y al saneamiento”, así como el “derecho a la ciudad” establecido en la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas (2016). En este contexto, deben adoptarse medidas que respondan a las dinámicas de la urbanización, las crecientes desigualdades sociales y las crisis climáticas y medioambientales.

4. Adoptar una postura clara ante los gobiernos nacionales en la **condena de los desalojos, reubicaciones o desplazamientos de población** que no respeten las normas de procedimiento destinadas a proteger a las personas afectadas. Estos se consideran ‘desalojos forzados’ y constituyen una grave violación de los derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas. Lo mismo vale para planes de reasentamiento en el marco de medidas de adaptación al cambio climático y proyectos de infraestructura previstos.

5. Centrarse en **proyectos de desarrollo orientados al beneficio y bienestar del 40 por ciento más pobre de la población urbana**. Esto incluye garantizar que la población afectada tenga la oportunidad de opinar e influir de forma efectiva en los proyectos de renovación y mejora urbana. También implica abogar por la creación de infraestructuras básicas y viviendas (sociales) asequibles, regular los mercados de suelo urbano e impedir la especulación inmobiliaria.

6. Abogar por la **integración de medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus consecuencias en la planificación del desarrollo local**, subrayar la **importancia de las ciudades en los planes nacionales de desarrollo y acción climática**, y

fortalecer el rol de los actores urbanos. Al planificar medidas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, es necesario garantizar la protección de los grupos poblacionales especialmente vulnerables e implicarlos activamente en su desarrollo y aplicación.

7. Promover un **acceso** directo, rápido y adecuado a **fondos de financiación climática (adaptación y mitigación del cambio climático, así como pérdidas y daños relacionados con el clima)** para actores no estatales y comunidades de asentamientos informales. Por último, pero no por ello menos importante, debe fortalecerse su participación en el diseño del nuevo Fondo para Pérdidas y Daños relacionados con el clima.

Recomendaciones de Misereor a sus organizaciones contraparte y aliados:

1. **Reconocer su importante rol como agentes del cambio e iniciar procesos de transformación con enfoque sistémico** hacia un cambio de paradigma basado en los derechos, favorable al sector empobrecido de la población, orientado a la participación y con arreglo a criterios de justicia climática. En este esfuerzo, las medidas concretas para mejorar las condiciones de vida a escala local o regional pueden suponer una contribución tan relevante como la participación en la configuración de los marcos políticos necesarios a todos los niveles.

2. **Estudiar los desafíos urbanos de manera transversal considerando todos los ámbitos de actuación relevantes**. Esto incluye, por ejemplo, tomar en cuenta por igual los aspectos sociales, económicos y ecológicos, así como sus interacciones, al realizar análisis de riesgos relativos a asentamientos o ciudades. Además, debe adoptarse un enfoque basado en evidencias y desarrollar estrategias fundamentadas también en futuros cambios demográficos o medioambientales.

3. Seguir respaldando **iniciativas de autoorganización** en las zonas urbanas desfavorecidas y acompañar a las comunidades en sus esfuerzos por lograr que sus **intereses y preocupaciones se vean reflejados en las políticas y la planificación a diversos niveles**. Para ello, se puede, por ejemplo, tratar de influir en la planificación del desarrollo local y nacional, velar por el control de los fondos presupuestarios públicos o apoyar la participación de las comunidades en los procesos políticos internacionales.

4. Poner el **foco en la situación de grupos especialmente vulnerables**. Esto significa, por ejemplo, que las preocupaciones de las mujeres y niñas, las familias monoparentales, los pueblos indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad, los jóvenes y los menores de edad deben recibir una consideración especial en el trabajo en proyectos y la labor política. Para ello es muy importante establecer métodos de participación adecuados para el respectivo grupo destinatario.

5. Promover la **formación de alianzas y redes con actores de la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional**, con el fin de crear sinergias y lograr mejoras más efectivas en las condiciones de vida de los grupos de población más vulnerables. Las alianzas intersectoriales también son cruciales para fortalecer el enfoque integral del desarrollo urbano.

6. Buscar la **escalabilidad de las medidas** como parte importante de su trabajo, con el fin de satisfacer la creciente necesidad de iniciativas para superar la pobreza, desarrollar infraestructuras y fomentar la autoorganización debido a la enorme magnitud de la urbanización y la crisis climática. En este contexto, la escalabilidad debe tener como objetivo lograr cambios sistémicos y, en menor medida, ampliar el alcance del trabajo local de la sociedad civil a nivel espacial/geográfico.

7. Buscar oportunidades para **forjar alianzas extraordinarias o inusuales**. Esto puede incluir el aprovechamiento de posibles intereses comunes con actores del sector privado para una ejecución más eficaz de proyectos orientados a grupos de población desfavorecidos y proyectos interesantes desde el punto de vista medioambiental —por ejemplo, iniciativas destinadas a crear o asegurar viviendas urbanas asequibles o iniciativas en el ámbito de la movilidad sostenible—. Esta búsqueda de alianzas también puede significar establecer nuevos contactos dentro de la sociedad civil organizada y promover la cooperación entre redes que hasta ahora trabajan de forma independiente

Foto: C. Weichelt / Misereor

Asamblea
vecinal en
un asentamiento
urbano de Guayaquil
(Ecuador)



Bibliografía

- Awumbila, M. (2017):** Drivers of Migration and Urbanization in Africa: Key Trends and Issues. Documento de referencia preparado para la Reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Ciudades Sostenibles, Movilidad Humana y Migración Internacional. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población. Secretaría de Nueva York. UN/POP/EGM/2017/12. ◀
- Bolay, Jean-Claude (2022):** Nicht nur die Megastädte zählen. En: Caritas 2023: Almanach Entwicklungspolitik: Urbanisierung im Globalen Süden. Págs. 81-100. ◀
- Dick, Eva (2013):** Urban-rural linkages within and between regions – an international perspective. En: Bäumer, Katrin et al. (eds.) 2013: Planning education for Iraq. German and Iraqi planners in dialogue. Klartext. Págs. 115-121. ◀
- Dodman, D., B. Hayward, V. Castan Broto, W. Chow, E. Chu, R. Dawson, L. Khirfan, M. Pelling, T. McPhearson, A. Prakash, Y. Zheng, and G. Ziervogel (2022):** Cities, Settlements and Key Infrastructure. En: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, R. U., y Nueva York, N. Y., EE. UU., págs. 907-1040, doi:10.1017/9781009325844.008. ◀
- FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS (2023):** The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc6550en>. ◀
- Greenstone, M., Hasenkopf, C., Lee, K. (2022):** Air quality life index. Global Update 2022: AQLI_2022_Report-Global.pdf (uchicago.edu) (acceso el 01.02.2024). ◀
- Harders, Cilja (2002):** Staatsanalyse von Unten: Urbane Armut und politische Partizipation in Ägypten. Mikro- und mesopolitische Analysen unterschiedlicher Kairoer Stadtteile, Hamburgo 2002. ◀
- Jedwab, Remi & Christiaensen, Luc and Gindelsky, Marina. (2017):** „Demography, Urbanization and Development: Rural Push, Urban Pull and... Urban Push?“ Journal of Urban Economics 98 (2017): 6-16. ◀
- OECD (2020):** A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis report, OECD Urban Policy Reviews, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/e86fa715-en>. ◀
- Pichler, PP., Zwickel, T., Chavez, A. et al. (2017):** Reducing Urban Greenhouse Gas Footprints. Sci Rep 7, 14659 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15303-x> ◀

- Shaw, R., Y. Luo, T.S. Cheong, S. Abdul Halim, S. Chaturvedi, M. Hashizume, G.E. Insarov, Y. Ishikawa, M. Jafari, A. Kitoh, J. Pulhin, C. Singh, K. Vasant, y Z. Zhang (2022):** Asia. En: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, R. U., y Nueva York, N. Y., EE. UU., págs. 1457-1579, doi:10.1017/9781009325844.012. ◀
- Steinberg F., (2014):** Rural-Urban Linkages: an urban perspective, working paper series N° 128, Working group: Development with Territorial Cohesion, Territorial Cohesion for Development Program. Rimisp, Santiago, Chile. ◀
- Strauss, Benjamin & Kulp, Scott & Rasmussen, D.J. & Levermann, Anders (2021):** Unprecedented threats to cities from multi-century sea level rise. Environmental Research Letters. 16. 10.1088/1748-9326/ac2e6b. ◀
- Tacoli, Cecilia & McGranahan, Gordon & Satterthwaite, David (2015):** Urbanisation, rural–urban migration and urban poverty. IIED Working Paper. IIED, Londres. <http://pubs.iied.org/10725IIED> ISBN 978-1-78431-137-7. ◀
- UCCRN - Red de Investigación sobre el Cambio Climático Urbano (2018):** Technical Report. How Climate Change Could Impact the World’s Greatest Cities. Febrero de 2018. ◀
- ONU DAES (2018):** Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition. ◀
- ONU-Hábitat (2022a):** Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 2022. Envisioning Future Cities: World Cities Report 2022. Naciones Unidas. ◀
- ONU-Hábitat (2022b):** Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 2022. Cities for Girls, Cities for All: Report from the Vinnova Innovation for Gender Equality Project. Naciones Unidas. ◀
- Base de datos de ONU-Hábitat (2020):** Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), Global Urban Indicators Database 2020, <https://data.unhabitat.org/pages/housing-slums-and-informal-settlements>. (acceso el 26.01.2024). ◀
- WBGU (2016):** Consejo Asesor Científico sobre Cambio Global del Gobierno alemán (2016): Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft der Städte. Zusammenfassung. Berlín: WBGU. ◀
- Worldatlas (2024):** Cities With The Most Income Inequality. <https://www.worldatlas.com/articles/cities-with-the-most-income-inequality.html>. (acceso el 01.02.2024). ◀

Pie de imprenta

Editor

Bischöfliches Hilfswerk
Misereor e. V.

Junio 2024

Mozartstraße 9
52064 Aachen
Teléfono: 0241 442 – 0
Fax: 0241 442 – 188
E-mail: postmaster@misereor.de
Sitio web: www.misereor.de

Autoras/es

Eva Dick
Kai Klause
Almuth Schauber
Clara-Luisa Weichelt

Redacción

Nina Brodbeck
Klaus Schilder
Blanca Beatriz Tovar Campos
Michaela Verboom

Traducción

Sandra Patow-Derteano, Francisco Caro Hidalgo

V. i. S. d. P. (responsable según la ley de prensa alemana)

Kathrin Schroeder

Diseño gráfico

VISUELL, Büro für visuelle Kommunikation

Foto de la portada

C. Weichelt / Misereor